

## El cambio de presidente. Elecciones mexicanas de 1976

FRANCISCO J. PAOLI BOLIO

### NOTA PRELIMINAR

Para entender mejor la coyuntura política de que se ocupa este trabajo, es necesario un conjunto de datos e interpretaciones sobre la formación del Estado mexicano, impulsor del régimen capitalista, así como distintas modalidades que dicho Estado adopta a partir del último cuarto del siglo XIX. Trataré de sintetizar esos datos e interpretaciones antes de desarrollar el análisis del cambio de Presidente en México (1976).

Las primeras tres cuartas partes del siglo XIX, el país se mantuvo en un período de intensas y casi constantes conmociones. Puede decirse que del año de 1810 en que empiezan a surgir los brotes independentistas, hasta 1867 en que triunfa definitivamente la República, hay una inestabilidad política y una desorganización del aparato productivo. El país fue progresivamente desintegrado durante todos esos años. Las luchas entre liberales y conservadores debilitan al Estado. Los primeros aspiraban a establecer una sociedad moderna, capitalista, civilizada e industrializada, usufructuaria de la ciencia y de la técnica modernas.

Los segundos querían conservar una organización social precapitalista, con su ideología inmovilizadora y aristocratizante y su Estado centralista mantenedor de los privilegios de grupos tradicionales dominantes (clero y terratenientes).

Después del triunfo liberal republicano, se inicia una etapa en la que la fuerza del Estado crece. La modalidad del aparato estatal durante el período que va de la consolidación de la República (1867) al final del gobierno de Victoriano Huerta (1914), es la del llamado Estado oligárquico liberal (Véase O. Ianni, *La Formación del Estado Populista en América Latina*, Era, 1975 y Juan Felipe Leal, *México: Estado, Burocracia y Sindicatos*, Ed. Caballito, 1975). Durante esa etapa, cubierta en gran proporción por el *porfiriato* (1876-1910), el aparato político crece en dimensión, en profundidad y en eficacia. Don Porfirio retoma una vieja

tradicón virreinal para integrar poderosamente la sociedad política: reconoce privilegios de caciques regionales y locales, los asimila al sistema nacional y legitima su fuerza. Nacen así, sancionados por el Estado, los *jefes políticos* organizados en una especie de pirámide, en cuya cúspide se coloca don Porfirio. En síntesis nació —o renació— entonces el Estado fuerte que concentra en el presidente muchas facultades, reales y formales.

La modalidad del Estado oligárquico liberal, tiene como función primordial impulsar el desarrollo capitalista en México. Lo hace otorgando privilegios y estímulos a la inversión extranjera lo que conduce a un capitalismo dependiente desde su origen. El nuevo Estado fuerte no cuenta desde el principio con una formación social en la que el modo de producción dominante es el capitalista. Por el contrario, ese Estado fuerte oligárquico liberal, que incorpora formas tradicionales de poder (Caciquismo) y las reorganiza en un nuevo sistema nacional, tiene como meta darle fuerza al modo de producción capitalista y redefinir toda nuestra formación social en función de él.

Entre 1914 y 1917 se devasta el Estado oligárquico liberal y se sientan las bases para la aparición de otra modalidad de Estado capitalista: *el populista*.

El Estado *populista* busca llenar el enorme hueco que dejó el liberal oligárquico. Una nueva coalición de fuerzas está en la base del populismo. Ninguna de ellas con capacidad suficiente como para encabezar sola el proyecto de desarrollo capitalista. Se produce la alianza de clases, encabezada por una fracción audaz de la pequeña burguesía, antioligárquica y poseedora del sueño capitalista. Esta fracción de pequeños burgueses modernizadores y conductores de masas obreras y campesinas está representada por personajes como Obregón, Calles y De la Huerta.

En México se produce un populismo temprano que para 1929 (con la creación del partido oficial) supera al caudillismo y se convierte en *populismo institucional* con fuertes rasgos corporativos. El populismo institucional de la actualidad sigue rechazando la lucha de clases y pregonando su conciliación. El lema integrista de la campaña de 1976, TODOS, habla claramente de esa conciliación. Aunque obviamente la formación de las clases sociales y su potencial de enfrentamiento han cambiado notablemente en nuestros días.

En el futuro inmediato se vislumbra un descenso de la fuerza del populismo institucional. Se previene que esta modalidad de Estado está empezando a tocar a su fin. En el futuro próximo en los planteamientos de los diversos grupos se advierten 3 posibles modalidades de Estado:

- 1) Continuidad del *populismo institucional* con rasgos corporativos
- 2) Estado eficientista tecnocrático, que reduzca la demagogia populista, aumente los controles corporativos y tolere, con represión dosificada, un crecimiento paralelo del movimiento popular independiente y
- 3) creci-

miento del autoritarismo, o bien, de un régimen dictatorial, con fuerte represión al movimiento popular. Veo como más viable la segunda modalidad para el curso de los próximos 6 años.

#### EL CAMBIO DE PRESIDENTE

El proceso electoral mexicano se enmarca dentro de otro más amplio y de mayor duración que se conoce con el nombre de *sucesión presidencial*. La denominación con la que se alude al suceso político más importante en nuestro país, fue tomada del título de un libro famoso del dirigente demócrata que desató la Revolución de 1910: Francisco I. Madero. En ese libro (*La Sucesión Presidencial de 1910*), Madero analizaba la situación política del país (1908), la herencia del liberalismo, los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz y sus reelecciones, para plantear finalmente el cambio que se iba a producir en 1910 y la necesidad de que el país se democratizara. El balance político de Madero no trataba con severidad a la dictadura de Porfirio Díaz, pero no aceptaba que éste siguiera decidiendo el destino político de los mexicanos, que más bien debería resolverse en una campaña electoral-democrática. Para no interpretar más a Madero reproduciré algunas de sus frases:

“Podemos hasta admitir que haya sido necesario para el país que lo gobernara por treinta y dos años con mano de hierro el general Díaz; pero lo que sí rechazamos en lo absoluto, es que sea conveniente que este régimen se prolongue”.

“Para evitarlo, para salvar a nuestra patria del inminente peligro que la amenaza, debemos hacer un vigoroso esfuerzo, organizándonos en partidos políticos, a fin de lograr que el pueblo esté debidamente representado y pueda luchar en las contiendas electorales, para que salga de su sopor, se fortalezca por medio de la lucha y conciba un amor más grande a la patria, a medida que sean mayores los bienes que reciba de ella, y mayor su participación en la cosa pública: a medida que ésta aumente, aumentará su preocupación por los grandes problemas nacionales que está llamado a resolver”.

(*Op. Cit.* Ed. 1963, págs. 350 y 351).

A casi setenta años de que escribiera Madero lo anterior, nuestro país ha visto sucederse un gobierno autoritario tras otro. Nunca se ha organizado un sistema de partidos propiamente. En vez de un dictador personal, tenemos un aparato que conjuga —o traslapa— la organización del gobierno con las organizaciones sindicales y campesinas oficialistas y el partido oficial. Es cierto que en muchos sistemas se encuentran dichos traslapes entre el partido que está haciendo gobierno, sus sectores sindicales o campesinos y los órganos de la administración pública, pero es

posible hacer una diferenciación básica entre los ámbitos gubernamentales y los partidarios. En México no es posible. Propiamente no puede hablarse de traslapes sino de una sola organización con expresiones exteriores distintas, formalmente diferenciadas. El gobierno y el partido, por lo menos, son una misma cosa. Los cuantiosos gastos del partido son cubiertos por el gobierno, aunque se utilicen fórmulas "discretas" para que eso no aparezca públicamente. Sin embargo, no puede ocultarse que muchos empleados gubernamentales, por ejemplo, son "comisionados" para desarrollar trabajos en el partido oficial. Durante las campañas presidenciales, estos "comisionados" suman una nómina mensual de muchos millones, ya que puede hablarse de miles de ellos.

Se trata, a no dudarlo, de un aparato semicorporativo que toma decisiones verticales, de arriba hacia abajo. Después de setenta años, el sufragio efectivo por el que luchara Madero es sólo un lema gubernamental, pero los puestos fundamentales definidos legalmente como de "elección popular" los decide el poder ejecutivo, quien, a su vez, es designado por el titular antecesor de dicho poder. Los gobernadores de los Estados son nombrados por el presidente de la República. Entre los gobernadores de los Estados y el presidente de la República se reparten los nombramientos de senadores y diputados, aunque, en muchos casos, la resolución la comparte este último con algunos secretarios de Estado o consejeros suyos. La oposición juega un papel verdaderamente marginal en la elección de algunos diputados de segunda (*llamados diputados de partido*) y obtiene algunas alcaldías.

#### ÉTAPAS DE LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

La sucesión presidencial dura un poco más de dos años, si se toma en cuenta la etapa oculta, en la que el candidato del partido oficial es seleccionado por el presidente en turno. Y parece que es indispensable tomarla en cuenta, ya que hay una serie de acciones y presiones políticas durante ese tiempo que se hacen en función de la selección del *tapado*, como se denomina al que después será candidato oficial y presidente de la República. Ciertamente, las interpretaciones sobre esos actos y presiones varían de intérprete a intérprete, y como es casi obvio, no es posible verificar, sino a muy grandes rasgos y a *posteriori*, qué intérprete se aproximó más a la correcta ponderación. En términos muy sinceros, hay que reconocer que se trata de una adivinanza.

Daniel Cosío Villegas señala que la sucesión presidencial mexicana tiene dos etapas: la de la elección oculta, esotérica —casi mágica— del candidato, es decir la etapa del *tapado*; y la segunda, su *destapamiento* o lanzamiento como candidato presidencial y su recorrido por la República

haciendo campaña. Dice don Daniel: "Aquella transcurre en un silencio y en una oscuridad que sobrecogen, mientras que la segunda arroba y fascina como luz de bengala". (*La Sucesión Presidencial*, pág. 9). El sarcasmo y la ironía son constantes del análisis de don Daniel metido a politólogo. Hay que anotar que el buen humor en el tratamiento de la sucesión presidencial es muy común en México, aunque en ocasiones hay humor negro y amargo. También eso varía según el cristal con que se mira.

A diferencia de Cosío Villegas, pienso que la coyuntura de la sucesión presidencial es un proceso con *tres* etapas que deben estudiarse sistemáticamente, porque entrañan elementos diversos y tienen significación política distinta. En el presente trabajo, me centraré en la primera y segunda.

La primera etapa es aquella en la que la especulación sobre el tapado empieza a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos más o menos informados de las cuestiones políticas nacionales, hasta el *destapamiento*.

La segunda, va del destapamiento —que se produce en el último tercio del año anterior a las elecciones—, hasta el primer domingo del mes de julio, fecha que el calendario electoral señala para que los ciudadanos —los mayores de 18 años— depositen su voto.

La tercera, es la del presidente electo. Se inicia entonces el eclipse. El presidente saliente tiene para entonces una fuerza descomunal y el presidente que va a entrar es relativamente débil, dependiente, casi mimético del anterior. Sin embargo, prepara su auténtico plan de gobierno, escucha opiniones y perfila su equipo de trabajo. Esta etapa ha sido poco estudiada hasta ahora. Pero puede ser muy importante hacerlo, ya que en ella se recogen y expresan las fuerzas al interior del aparato gubernamental en la integración del equipo que dirigirá al país durante el siguiente sexenio.

En la reciente sucesión presidencial, que tuvo lugar en más de dos años y medio —un período demasiado largo, si se toman en cuenta procesos anteriores—, las etapas quedaron comprendidas en los siguientes límites:

PRIMERA.—Del cuarto o quinto mes de 1974 en que se inicia la especulación intensa, que se va haciendo cada vez más diaria y sistemática, hasta el destapamiento del candidato oficial, José López Portillo, secretario de Hacienda, el 22 de septiembre de 1975.

SEGUNDA.—Del 23 de septiembre de 1975 al 4 de julio de 1976 en que tuvieron lugar las elecciones federales.

TERCERA.—Del 5 de julio de 1976 al 1º de diciembre de 1976 en que el presidente toma posesión e inicia su gobierno. En esta etapa aunque

el presidente electo se muestra exteriormente mimético del saliente, en realidad prepara su rostro político inédito, el que lo diferenciará. Este sello propio sólo se manifiesta en el primer año de gobierno.

*Primera Etapa.*—Es necesario citar como antecedente de la primera etapa, que el gobierno del presidente Echeverría, había tenido movimientos muy contradictorios en los tres años y medio anteriores. Durante sus dos primeros años pareció que el gobierno iba a emprender reformas considerables. Una reforma fiscal que gravaría más a los capitales que a los ingresos por concepto de trabajo. Una intensificación de la reforma agraria, con la nueva Ley Federal que para el efecto aprobó el Congreso. Una reforma política que facilitaría la organización de nuevos partidos, más auténticos y pujantes que los formalmente reconocidos, para entonces gastados y desprestigiados. Y un estímulo a las organizaciones sindicales independientes —que en México eran y siguen siendo relativamente pequeñas, aunque durante ese sexenio se incrementaron—, para que combatieran a los dirigentes oficialistas corruptos y mediatizadores de las luchas obreras.

Sumadas a esas expectativas estaban, además, la promesa de desarrollar a lo largo del período gubernamental una política internacional independiente, consecuente con la de los países tercermundistas no alineados; controlar la inversión extranjera directa en México; y modificar la política de endeudamiento externo, que según declaraciones del propio presidente Echeverría al principio de su mandato, había alcanzado límites peligrosos.

La expectativa de las reformas se mantuvo durante los primeros dos o tres años. Para principios de 1974 ya estaba claro que ninguna de las reformas anunciadas, tenía bases para realizarse. El gobierno dio en todas ellas marcha atrás, en distintas formas. En algunos casos las siguió sosteniendo verbalmente, aunque había poca acción gubernamental consecuente. Las expectativas, sin embargo, habían desatado una serie de acciones en el seno de la sociedad civil. En el campo se intensificaron las invasiones de tierras por diversos grupos campesinos, la mayoría de ellos protegidos o avalados por organismos oficialistas; en las ciudades proliferaron los movimientos sindicalistas independientes. Los empresarios y agrupaciones patronales manifestaron más o menos indirectamente que no tenían confianza en el gobierno. Los dirigentes sindicales oficialistas —que en México se conocen con el mote de *charros*— también se disgustaron y se mostraron muy agresivos ante la tolerancia inicial que el gobierno parecía estar sosteniendo con los movimientos sindicales que los impugnaban. La lucha de clases creció notablemente en ese período.

El viraje del gobierno se hizo patente a fines de 1973 y principios de 1974. En el campo sindical este cambio aconteció en forma dramática. Poco a poco dejaron de ser registrados los sindicatos independientes. El

registro que otorga a estas organizaciones laborales, les concede personalidad jurídica y capacidad para obtener primero y administrar después los contratos colectivos de trabajo. Durante un tiempo el gobierno federal y algunos de los Estados estuvieron registrando sindicatos independientes. Esa política se modificó radicalmente durante el año de 1973.

Ya desde fines de 1973 y principios de 1974 los empresarios empezaron a manifestar que estaban "recuperando" la confianza en el régimen de Echeverría. Durante el año de 1973, aunque se había sostenido el crecimiento del Producto Nacional Bruto (que fue del 7.1 por ciento), el informe del Banco de México (central), aceptó que se había incrementado considerablemente el proceso inflacionario. El crecimiento del PNB en 1973 se podía explicar más por el aumento de la producción en ramos del sector industrial y urbano como la petroquímica, 15 por ciento; energía eléctrica, 8.5; manufacturas, 8 por ciento; y construcción 15.5 por ciento. Los dos ramos primeros y el último dependen del gobierno en gran proporción. En el sector primario en cambio el incremento fue bajísimo (agricultura, 1.7 por ciento; ganadería, 2.5 por ciento). Eso revela la reacción de los empresarios agrícolas ante las frecuentes invasiones y lo que se dio en llamar la "inseguridad en el campo". En general hubo una reducción notable de la inversión privada y un incremento de la pública. Esta última descansaba en los créditos externos y la deuda pública creció en forma descomunal. Comentando la deuda externa, Heberto Castillo, presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), dijo en uno de sus artículos periodísticos: "La deuda externa que preocupara al inicio del régimen aumenta, a 54 mil millones en 1972 (en 1970 era de 41 mil millones), 71.647 millones en 1973 y 140 mil millones en 1974 (con la excepción de la última cifra que es de expertos de la ONU, las demás provienen de la Dirección General de Crédito de la Secretaría de la Presidencia)". (*Excélsior* 22 de mayo de 1975, artículo titulado "Bancarrotas Económicas: Recordando a Luis Cabrera"). La deuda externa siguió creciendo hasta hacerse 14 veces mayor (600 mil millones de pesos) en el sexenio de Echeverría. Es fácil entender que las condiciones políticas puestas por los otorgantes del crédito internacional o las "autolimitaciones" que para pedirlo impusieron los gobernantes a los movimientos sociales y políticos independientes se tradujera en frenos considerables para esos movimientos.

De hecho, a principios de 1974 un dirigente de la poderosa CONCAMIN (Confederación Nacional de Cámaras Industriales), había reconocido que los industriales perdieron la confianza en el gobierno, pero que eso ya estaba superado y la habían recuperado (*Excélsior*; 27 de enero de 1974). La recuperación de la confianza patronal se explica, en parte, por la tremenda represión que desde fines de 1973 se había desatado contra los movimientos sindicales y políticos independientes. En efecto, el mes de febrero de 1974 fue un mes de constantes denuncias de desaparición de dirigentes de izquierda. El caso más dramático fue el ase-

sinato, con previas torturas, del dirigente sindical yucateco, Efraín Calderón Lara. (Comandaba en Yucatán un Frente Sindical Independiente que se había venido haciendo cada día más fuerte). La muerte de Calderón Lara por instrucciones de jefes policiacos, que incluso fueron penalmente responsabilizados y encarcelados, marcaba el fin tajante de toda tolerancia a los movimientos independientes.

Eso sucedía en las inmediateces de la etapa esotérica de la sucesión presidencial. En marzo de 1974 el partido oficial (PRI) cumplía 45 años de imponer su voluntad a lo largo y a lo ancho de la república. En mayo de ese mismo año, ya empieza la especulación sobre la sucesión presidencial. Esta especulación no tiene más bases que obtener información sobre cuál de los secretarios de Estado y jefes prominentes de organismos gubernamentales tienen mayores simpatías del presidente en turno. También se especula sobre las fuerzas que tienen afinidad con los posibles *tapados* o de plano que apoyan a algunos de ellos. Entre estas fuerzas están, desde luego, los empresarios organizados (en Cámaras y otras instituciones) y los trabajadores oficialistas sindicalizados. La sola presencia del fenómeno sucesorio dio fuerza renovada a *charros* y empresarios, ya que el equipo gubernamental perdía su cohesión y empezaban los velados pero reales enfrentamientos entre secretarios de Estado que se sentían aspirantes a la presidencia. A partir de ese momento se inicia una silente lucha en la cúpula del poder. Durante esta sucesión se planteó la existencia de dos grupo gubernamentales, que representaban alternativas relativamente excluyentes. Julio Labastida plantea al primero en contradicción: "Una fracción de la burocracia política reformista, que se enfrenta no sólo a fracciones del propio aparato, sino a grupos económicos muy importantes, tanto nacionales como extranjeros, y que ha seguido líneas políticas que tampoco han gustado a los Estados Unidos". (*Cuadernos de Sociología*, UIA, Vol. I N° 3) Ese primer grupo se plantea como el continuador de la política echeverrista. El otro grupo gubernamental que podía suponerse era más conservador, o más dispuesto a recibir y acatar las presiones de los empresarios nacionales y extranjeros.

La primera mitad del año de 1974 presenta un panorama interesante desde el punto de vista de la lucha de clases. En primer lugar, se desarrollaron un número inusitado de movimientos sindicales independientes. Esto se explica parcialmente por la fuerte inflación del año de 1973. Véamos el panorama de la sociedad civil más de cerca:

En febrero de ese año se inició una huelga en la empresa Majestic Dinesa, que se prolongó hasta mediados de junio. El 1º de abril, estalló otra huelga promovida por trabajadores independientes en Nissán, empresa productora de automóviles. El 11 de abril tuvo lugar otra huelga de independientes en Cementos Tolteca, del Estado de Hidalgo. El 16 de ese mismo mes estalló otra más de proporciones enormes, en las principales industrias del estado de Coahuila (CINSA Y CIFUNSA).

En junio el sindicalismo independiente volvió a la carga: el día 13 fue emplazada a huelga la empresa transnacional General Electric; no concluía el mes cuando otra empresa transnacional, Upjohn, vio ocupados sus locales por trabajadores independientes, los que el 9 de julio fueron desalojados por miembros de sindicatos oficialistas armados con ametralladoras; ya en mayo se habían producido en el Estado de Morelos (sede de Upjohn) enfrentamientos entre trabajadores independientes y oficialistas a propósito de los festejos del día primero. Otro conflicto entre independientes y *charros* se desarrolló en la empresa Texturizados Lido.

Los trabajadores oficialistas o *charros*, habían manifestado que estaban dispuestos a emprender la violencia si no se respetaban sus posiciones. Probaron que estaban dispuestos a hacerlo. Para sus acciones contra los movimientos independientes contaban con el apoyo o el disimulo del gobierno y el de los empresarios afectados. El secretario del Trabajo, precandidato a la presidencia de la república, dio pruebas de ser un hábil componedor. Estaba siendo calibrado por los observadores y las fuerzas en discordia. En este proceso el secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, ganó el apoyo de los *charros*. Pero perdió la buena voluntad de los patrones, ya que sus declaraciones públicas siempre favorecieron a los trabajadores.

En segundo lugar, otro de los supuestos "indicadores" de la sucesión presidencial, según lo piensan algunos analistas, son las sucesiones de los Estados federativos y aun de los municipios, sobre todo los de ciudades importantes. Si los amigos de un secretario de Estado, o director de organismo gubernamental, llegan a la gubernatura de algún Estado, marcan un punto a su favor. El año de 1974, fue rico en especulaciones, ya que se produjeron 12 "elecciones" de gobernadores y más de mil presidentes municipales. La verdad es que estos indicadores indican bien poco, o bien, de plano indican nada, porque siendo tan vagos y prestándose a tantas interpretaciones, pueden mostrar cosas distintas a diversas personas o grupos. Pero entre una especulación y otra el proceso de la sucesión en su etapa esotérica, se ha desatado. Todos los secretarios de Estado y directores de organismos gubernamentales que se sienten posibles *tapados*, desarrollan sus actividades con cuidadosa y vigilante actitud política. Se observan unos a otros. Y se dice que se dan entre ellos zancadillas, a fin de lograr el respectivo desprestigio ante los ojos del gran elector. Es la época de la criptocampaña presidencial. También hay alianzas entre los que saben que no tienen oportunidad con aquellos que parecen más viables *tapados*.

La primera mitad del año 1974, terminó con gran publicidad al movimiento guerrillero del Estado de Guerrero que secuestró al candidato oficialista al gobierno de ese Estado.

Otro evento digno de destacarse, porque parecía anunciar una lucha electoral inédita, fue la conferencia de prensa convocada por los dirigentes del Comité Nacional de Auscultación y Organización (CNAO), en la que comunicaron que constituirían un nuevo partido político independiente. Habían llegado a esa conclusión después de recorrer 26 de los treinta y un Estados de la República auscultando a los trabajadores, empleados, profesionistas, artistas, intelectuales y estudiantes. El CNAO se convirtió en Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) en septiembre de ese año y está encabezado por uno de los dirigentes del movimiento estudiantil-popular de 1968, Heberto Castillo; por un destacado líder ferrocarrilero que estuvo once años preso, Demetrio Vallejo, y otros dirigentes e intelectuales que se destacaron en las luchas sociales en la última década.

A mediados de 1974, el presidente Echeverría pidió a sus colaboradores que ese año se dedicaran a trabajar y que el año entrante, todo aquél que quisiera aspirar a la presidencia lo hiciera dentro de los cauces institucionales. Obviamente, trataba de frenar un combate que ya estaba desatado. No consigue frenar la criptocampaña, sino que, por el contrario, parece que la hubiera sancionado. En julio, el gobernador de Nuevo León declaró a la prensa que había muchos grupos interesados en el cambio de gobierno. Afirmó: "creo que sería muy sano que se mencionen nombres." (*Excélsior*, 4-VII-74). Al día siguiente de sus declaraciones, otro gobernador, el de Sonora, declaró que "ninguna distracción de orden político debe alterar la permanencia y constancia de nuestros empeños de trabajo" (*Excélsior*, 5-VII-74). Este último gobernador recordaba al primero la exhortación presidencial aludida. Se trataba de un diálogo velado sobre la sucesión presidencial que salió a flor de prensa. La cripto-campaña estaba dándose. Nadie la entendía —porque parece que sólo el presidente puede entenderla— pero todos los "enterados" hablaban de ella. La sucesión, además de un proceso político es un juego social, en el que muchas fracciones de clase participan, a nivel especulativo.

Para completar la recuperación de la confianza, el gobierno difundió las tesis de que había propiciado inversiones, garantías al sector privado y que los resultados estaban a la vista. En agosto de 1974, Jesús Puente Leyva, alto ejecutivo de la principal financiera gubernamental (NAFIN SA), declaró que en 1973 y lo que iba del 74, la empresa privada obtuvo "su mayor ganancia en los últimos quince años." (*Excélsior*, 11-VII-76)

Otro dato que conviene destacar, es que el Partido Acción Nacional (PAN), desde fines de julio y principios de agosto de 1974 empezó a manifestar los primeros síntomas aparentes de una profunda crisis de la que todavía no se repone. Tal vez ya no se repondrá. El PAN era el único partido que había lanzado candidaturas presidenciales independientes en los últimos cuatro sexenios. Los síntomas de la crisis panista se manifestaban por esos días como una discusión dentro del

partido azul de la pequeña burguesía católica, sobre si debía presentar candidato presidencial o no. Los voceros del PAN, dominado en ese momento por una conservadora corriente populachera encabezada por José Ángel Conchello (publicista), dijeron repetidamente que decidirían la postulación hasta su Asamblea Nacional de noviembre. Conchello era partidario de lanzar nuevamente candidato presidencial. Otra corriente con arraigo y tradición en el partido, encabezada por Efraín González Morfín, anterior candidato presidencial del PAN (profesor universitario), se manifestaba claramente por no postular candidato presidencial. De hecho, González Morfín, reconocido intelectual, se había venido oponiendo a que el PAN participara en las elecciones presidenciales desde que él mismo, acatando la disciplina partidaria, contendió contra Echeverría y obtuvo la más alta votación que se ha reconocido al partido azul: cerca de dos millones de votos.

Durante la segunda mitad del año de 1974, la presión de los *charros* sobre el gobierno y los patronos a fin de obtener aumentos de salarios, fue considerable. Esta presión, en parte, se explica por el notable crecimiento del movimiento obrero independiente que lograba reivindicaciones considerables y demostraba a la clase entera cuál era su auténtico camino de lucha. El Congreso del trabajo, organización cúpula que reúne a todas las centrales obreras oficialistas (afiliadas al sector-obrero del PRI), planteó la necesidad de que las mejoras salariales, provenientes de las revisiones de los salarios mínimos como de los contratos colectivos de trabajo, se hicieran más frecuentes. Para ello se requería que la legislación lo autorizara. La presión de los *charros* estaba orquestada por cuantiosos emplazamientos de huelga.

A fines de agosto de 1974, días antes del informe presidencial (1º de septiembre), el movimiento guerrillero alcanzó su mayor publicidad secuestrando al suegro del presidente Echeverría, Guadalupe Zuno Hernández, quien fue devuelto el siete de septiembre. Ante acontecimientos tan dramáticos, la criptocampaña disminuía, pero no dejaba de tener lugar.

El informe del presidente Echeverría después de cuatro años de gobierno, procuró dar parcial razón a trabajadores y empresarios patrióticos y nacionalistas, con tono populista. En este informe Echeverría atacó la violencia reaccionaria y pareció dar estímulo a las organizaciones políticas independientes, cuando dijo: "No es por la acción de pandillas ni en el clandestinaje, sino en la plaza pública a la luz del día, donde los verdaderos patriotas buscan el mandato del pueblo..."

Entre los días 5 y 8 de septiembre el PMT celebró su Asamblea Nacional Constituyente y anunció que solicitaría su registro ante la Secretaría de Gobernación.

El problema obrero-patronal dominó casi todo el mes de septiembre. La "huelga general" anunciada por los *charros* debería estallar el 20 de

septiembre si no lograban los aumentos. No estallaron las huelgas. Los trabajadores obtuvieron bases para acuerdos en cada empresa por los cuales obtendrían un promedio del 22 por ciento de aumentos. Obtuvieron también que la revisión de contratos colectivos y salarios mínimos se hiciera cada año (en vez de cada dos como se venía haciendo).

En su informe del 1º de septiembre, Echeverría inculpó a los medios masivos de información de estar promoviendo la violencia. La imputación resultó especialmente dramática, en vista de que el suegro del presidente estaba en esos momentos secuestrado. El 20 de septiembre, otro sonado precandidato, el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, ordenó la cancelación de 37 series de televisión (norteamericanas casi todas), por considerarlas promotoras de violencia. El acto no pudo menos que interpretarse como parte de la criptocampaña de ese precandidato, para ganarse la voluntad presidencial y con ella la sucesión. Más tarde, avazando el mes de octubre, el presidente Echeverría y Moya externaron criterios aparentemente distintos en torno a la significación social de la televisión comercial en el país. Moya dijo (20 de octubre) que había avanzado mucho la comunicación entre pueblo y gobierno por el uso de los medios, en tanto que Echeverría dijo (24 de octubre) que la televisión había sido un medio de incomunicación humana. Las diferentes apreciaciones del presidente y del secretario de Gobernación, hechas con tanta proximidad, fueron interpretadas como desacuerdo básico entre ellos. Esta señal se venía a sumar a otras que afectaban a Moya. El mes de abril de 1975 Moya fue atacado por el cacique del Estado de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite y por sus seguidores. Sánchez Vite, promovía la candidatura del doctor Otoniel Miranda, para Gobernador del Estado de Hidalgo a la que, aparentemente, se oponía Moya. Miranda fue lanzado como candidato del PRI a gobernar el Estado de Hidalgo, con lo que los especuladores empezaron a descartar a Moya como precandidato presidencial.

El 28 del agitado y patrio mes de septiembre de 1974, el PAN celebró su aniversario número 35 (diez años más joven que el PRI) y declaró ser el partido "con base popular voluntaria más grande de México". Y en cierta forma la afirmación era cierta. En México sólo ha tenido éxito como partido permanente de oposición, este que representa los intereses de la pequeña y mediana burguesía católica (subrepticamente ayudado, por sí convenir a sus intereses, por fracciones de la alta burguesía). Los obreros y campesinos no han logrado hasta ahora un partido permanente de oposición que tenga importancia nacional. El PMT es apenas un embrión y una esperanza que despunta. El PCM no lo ha conseguido en sus casi sesenta años de lucha.

El mismo mes de septiembre, en la Secretaría de Hacienda, se empezó a hablar de una reforma fiscal que se aplicaría en 1975. En tal reforma se anunciaba un gravamen mayor a los consumos de gasolina, restaurantes de lujo, vinos y licores, tabacos, automóviles según su precio, avio-

nes, perfumería, joyas y otros lujos. También se anunció el incremento de impuestos a quienes tenían altos salarios o percepciones personales elevadas. La precandidatura del secretario de Hacienda pasaba a ocupar el centro de la escena, por supuesto. El Estado requería nuevos recursos y la reforma o "adecuación fiscal" como se llamó después. Los buscaría afanosamente.

El día 25 de septiembre de 1974, Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Trabajo, dijo en su comparecencia ante los diputados que la inflación había afectado a las clases desprotegidas y apoyó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para propiciar los aumentos salariales. Muñoz Ledo, ganó el odio de los empresarios privados, cuando declaró que "las empresas que no pueden garantizar condiciones dignas a sus trabajadores, no tienen razón de existir". La defensa de los salarios que hizo Muñoz Ledo podía o no ser una carta favorable para su precandidatura presidencial, pero tenía que jugar ese papel. Muchos observaron que después de esa intervención en la Cámara de Diputados, jamás podría ser aceptado como candidato oficial por los grupos empresariales de presión y sus socios extranjeros. Muñoz Ledo se había caracterizado como el más conspicuo representante e ideólogo de la fracción populista de la burguesía política. Dentro del marco de la criptocampaña especuladora, se mencionaba por esos días cuatro precandidaturas fuertes. Dos clasificados como polos opuestos: Mario Moya, secretario de Gobernación, como la posibilidad de la derecha; Porfirio Muñoz Ledo, secretario de Trabajo, el hombre de izquierda; los otros dos candidatos fuertes considerados o más o menos al centro, era el secretario de Hacienda, José López Portillo y Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia. Se mencionaban a otros posibles. La especulación, las caricaturas en los diarios, el acoso periodístico a los posibles, y hasta las quinielas sobre quien llegaría a la presidencia se hicieron sistemáticamente a partir del mes de octubre de 1974. Como antecedentes se invocaban que todos los presidentes civiles, con excepción de uno, habían salido de la Secretaría de Gobernación. La excepción era el licenciado López Mateos, que salió de la Secretaría del Trabajo. Los secretarios de la presidencia también tenían gran fuerza; se decía insistentemente que desde que esa Secretaría fue fundada, sus titulares eran aspirantes fuertes, con muchas posibilidades, en vista de su gran proximidad con el gran elector. El secretario de Hacienda era también tradicionalmente un fuerte precandidato, al menos en cuanto que se le mencionaba con insistencia.

El presidente Echeverría de alguna manera afirmó la criptocampaña a principios de octubre de 1974 cuando declaró: "Es útil que la opinión pública analice a los hombres y los critique en relación con la sucesión presidencial... Yo creo que a lo largo del segundo semestre del año entrante, la opinión pública nacional comenzará a definir sus inclinaciones; pero mientras tanto, todo mundo debe ser objeto de estudio, de

observación, de crítica. Es democráticamente saludable". A partir de esa declaración presidencial, la criptocampaña se volvió sistemática.

El suceso que llamó poderosamente la atención de muchos observadores, fue el anuncio de nuevos yacimientos petroleros encontrados en el sureste. El descubrimiento fue dado a la publicidad en la segunda quincena de octubre.

Los recursos del Estado y la fuerza del presidente crecerían enormemente, ya que permitirían además del poder político concentrado en ellos la disposición de nuevas riquezas para disminuir los estragos de la inflación y también atenuar la dinámica de la lucha de clases que había sido acelerada y daba jaques considerables al gobierno y a diversos sectores de la burguesía industrial y comercial.

Todavía durante el mes de octubre de 1974 hubo otro evento que se consideraba como notable dentro de la criptocampaña presidencial; la presidencia del secretario de Hacienda, José López Portillo, ante la Cámara de Diputados para defender la reforma o "adecuación" fiscal. López Portillo argumentó, que no podía seguirse financiando los gastos del país con créditos exteriores en perjuicio de generaciones posteriores, aceptó que el país vivía una severa crisis económica y se declaró optimista y con fundadas esperanzas de que el país saldría adelante. Se dice, que esa intervención en la Cámara de Diputados en momentos difíciles sería muy importante en su selección como candidato presidencial del PRI casi un año más tarde. El secretario de Hacienda se reveló en ella como un conciliador capaz de manejar la retórica populista que al mismo tiempo transmite su moderada pero vibrante preocupación por las necesidades de la mayoría depauperada, al paso que proclama su respeto por los empresarios nacionalistas y patriotas que saben estimular la producción y su confianza en la fuerza de trabajo con la que identifica los propósitos del gobierno. En aquella ocasión, para contrarrestar un poco el amargo sabor de la crisis, López Portillo habló de los grandes recursos turísticos, naturales —destacando especialmente los recientes descubrimientos petrolíferos— y humanos con que contaba el país. Parte de esas expresiones de López Portillo fueron improvisadas como respuestas a distintas inquisiciones de los diputados, entre ellos de la diputación panista.

Antes y después de la comparecencia del secretario de Hacienda, la reforma o "adecuación" fiscal fue objeto de fuertes debates. La impugnaron abiertamente la agrupación de Abogados de Empresa y la Asociación de Industriales del Estado de México, el PAN, PMT y el PCM. Se decía que con los nuevos impuestos López Portillo se había echado encima a vastos sectores de las clases medias y de las organizaciones empresariales. Los *charros* aceptaron a regañadientes las "adecuaciones" fiscales porque gravaban considerablemente los salarios de los trabajadores. Los sindicatos independientes hicieron público su rechazo airado. Algunos aseguraban en medio de esta tormenta de la criptocampaña,

que con las “adecuaciones” se cancelaban las posibilidades de López Portillo para ser presidente. Otros, por el contrario, decían que había ganado puntos ante los ojos del único importante en este proceso: el presidente de la República. Quienes argumentaban esto último, señalaban que el secretario de Hacienda había dado valientemente la cara en una crisis cuya responsabilidad tenía más bien el presidente Echeverría, además de que era el principal promotor de una política para hacer llegar fondos frescos a las vacías arcas del gobierno federal. Efectivamente, la crisis económica por aquellos días, había afectado fuertemente al gobierno. Las obras públicas estaban detenidas en gran medida, los salarios de los burócratas sujetos a contratos temporales —de servicios profesionales— no se estaban cubriendo desde hacía meses, el país no podía hacer frente a algunos compromisos internacionales.

El 8 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó las “adecuaciones” fiscales con algunas modificaciones. Con esa base pronto el Estado empezó a coleccionar recursos frescos que le sirvieron para sortear la crisis. La polémica entre el gobierno y los empresarios no ya sobre las “adecuaciones” fiscales que poco afectaban a estos últimos, sino sobre la principal causa de la inflación, cobró importancia. El gobierno decía que la principal causa de la inflación era externa. Los empresarios, a través de sus organismos de presión, decían que la causa primordial de una inflación desbordada y no manejable, era el gasto público. El mismo 8 de noviembre, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Jorge Pintado Rivero, dijo de plano en una conferencia: “Es falso que la inflación mexicana se deba predominantemente a factores externos: Estos contribuyen indudablemente a nuestra inflación. Pero si quisiéramos cuantificar la influencia de los factores internos y externos, podríamos decir que el fenómeno inflacionario mexicano se debe en mucho más alto porcentaje a factores internos que a externos”. Más adelante insistiría: “El factor interno determinante de la inflación ha radicado en un gasto público que excede a la capacidad real del país y en la falta de jerarquización de dicho gasto; se ha creado abundante y costosa burocracia con sacrificio de la productividad y de la efectividad...” (*Excelsior*, 8-XI-74). Como puede verse los empresarios mexicanos presionan eficazmente al Estado para tratar de que éste encauce sus acciones en el sentido exacto que ellos quieren, sin que esto quiera decir que siempre lo consiguen. En el caso apuntado, su presión buscaba reducir la ampliación de actividades estatales que efectivamente habían crecido notablemente durante el gobierno de Echeverría, o de plano detenerlas. Esta presión se fue haciendo cada día más grande hasta que faltando menos de dos meses para terminar su período el presidente Echeverría cedió y lanzó un decreto en el que previene la liquidación de un buen número de organismos gubernamentales. El sucesor de Echeverría no sólo siguió teniendo esa presión, sino que parece estarla atendiendo con mayor tino y eficacia. Las presiones de los empresarios organizados no

son tanto en función de lograr que una persona sea candidato presidencial, como de conseguir que, sea quien sea, siga cierta política. Aparentemente la política deseada por los empresarios nacionales y los inversionistas extranjeros se ha empezado a desarrollar desde los primeros momentos del gobierno de López Portillo con la llamada "Alianza para la Producción".

Los empresarios tenían datos y parcial razón. El gasto público contribuía notablemente a la inflación, aunque no es fácil determinar en qué proporción. El gobierno de Echeverría, a través de diversos voceros contraatacaba y acusaba a los empresarios, sobre todo a los comerciantes, de aumentar ficticiamente los precios. La izquierda, apenas audible, propuso el establecimiento de la escala móvil de salarios.

La justificación del exceso de gasto público, frecuentemente, fueron los campesinos. El argumento del gobierno —que fue de sus críticos durante el período anterior—, era que el campo había "transferido" muchos recursos a las ciudades y que ahora era tiempo de devolver recursos al campo. Para tal fin se montaron una serie de fideicomisos. Con tales fideicomisos se buscaba apoyar negocios de los que se podían beneficiar los campesinos. En gran parte estas inversiones se fueron en gastos de administración. Se llevaba más burocracia al campo para paliar, aparentemente, los problemas de los compromisos. Un apoyo más efectivo del gobierno a los campesinos consistió en elevar los precios de garantía de los productos agrícolas.

Durante los últimos días de 1974 y los primeros de 1975 el Presidente de la República alentó la criptocampa presidencial, cuando hizo en varias ocasiones retratos hablados de su sucesor. La imaginación de los intérpretes volaba por distintos rumbos afirmando la candidatura de unos y descartando la de otros. Los dirigentes políticos desataron muchos comentarios sobre si debían o no pronunciarse, la disciplina de partido y la necesidad de esperar a que el "pueblo" se manifestara primero.

El nivel de la especulación sobre la sucesión presidencial subió notablemente en los primeros meses de 1975. Se decía, a veces, que en los sectores del partido oficial se llevaba a cabo una auscultación sobre el mejor candidato. El 22 de marzo, por ejemplo, Joaquín Gamboa Pascoe, dirigente *charro* de los trabajadores del Distrito Federal, declaró que: "... el sector obrero lleva adelante una auscultación interna previa al proceso de la sucesión presidencial". (*Excelsior* 22-III-75). La auscultación desde luego, es sólo un acto publicitario. Lo más importante es su anuncio. Nadie sabe cómo se ausculta, quién y cuáles son los resultados de la auscultación.

Evidentemente el proceso del destapamiento tuvo un mayor suspenso en esta ocasión que en anteriores. El 28 de marzo el gobernador de Baja California Norte, Milton Castellanos, destapó a siete precandidatos.

El gobernador bajacaliforniano se justificó diciendo que eran los nombres que el pueblo estaba manejando. Las declaraciones de Castellanos se publicaron en los periódicos locales, pero no tuvieron eco nacional. Los nombres que proporcionó son los cuatro que mencioné antes, más el secretario de Reforma Agraria, Augusto Gómez Villanueva; el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes; y finalmente, el director del Seguro Social, Carlos Gálvez Betancourt, único que no tenía rango de secretario de Estado. El 11 de abril, presionado por los reporteros, el gobernador de Querétaro, menos audaz que el de Baja California, declaró: "Hay un Instituto Político, del que somos muy respetuosos y con el que somos muy disciplinados, que es el único facultado para emitir un nombre." (*Excélsior*, 12-IV-75-. La declaración de este último gobernador representa la actitud dominante de los jefes políticos mexicanos.

El 10 de abril, el presidente Echeverría fue entrevistado por Alejandro Iñigo de *Excélsior* en Chimalpa, Morelos, durante una gira de trabajo. El reportero le preguntó sobre el *tapadismo*. Respondió:

—Todos los aspirantes al ser postulados por todos los partidos políticos están perfectamente destapados.

—Entonces —insistió el periodista— ¿no existe el "tapadismo"?

—El término sí —dijo el presidente—.

En forma confusa volvió el reportero por el tema:

—Pero se presta un poco a jugar con él. ¿No hay un proceso realmente dentro del partido para que la gente vea que no hay tapadismo?

—Los partidos deben demostrar las características de los aspirantes a los cargos de elección popular —respondió el presidente en una típica salida por la tangente que alude a un sistema de partidos, que no existe— y completó: —Yo estimo que en este país de libertades ese concepto ya no tiene razón de existir. Todo el mundo puede analizar a todas las personas y decir de ellas lo que quiera". (*Excélsior*, 11-IV-75).

El 11 del mismo mes, David Gustavo Gutiérrez, jefe del llamado "sector popular" del PRI (CNOP), que agrupa a todos que no caben dentro del sector obrero y campesino, remachó la idea de que no existía tapadismo y que se estaba llevando a cabo "un proceso de auscultación en torno de ideas y programas que los cenopistas consideran deben ser la acción futura de nuestro sector". (*Excélsior*, 12-IV-75).

La novedad de esta última sucesión presidencial no fue la negación del *tapadismo*. Este siempre se ha negado. Los voceros del sistema oficial proceden en este como en otros aspectos políticos con una suerte de esquizofrenia: declaran conforme a la legalidad, mientras que el sistema opera por debajo o por encima de ella, pero en un sentido distinto de lo que dicha legalidad dispone. La originalidad en esta ocasión consistió en que el tapadismo tuvo una nueva presentación en público y un elenco

ampliado de actores, además de las declaraciones del propio presidente y de políticos de alto nivel que estimularon la especulación sobre los precandidatos al extremo de la caricatura.

Así, el 12 de abril, el Secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa, que acompañaba al presidente Echeverría en la mencionada gira por el Estado de Morelos, declaró a la prensa que había siete precandidatos (*Novedades*, 13-IV-75). Rovirosa pidió a los periodistas que no publicaran la lista, que se trataba de una plática de amigos. Los periodistas salieron disparados a publicarla y a entrevistar a los precandidatos.

Después de las declaraciones de Rovirosa, Jesús Reyes Heróles, jefe del PRI, señaló que las personalidades mencionadas debían analizarse a la luz pública, con respeto, y que los dirigentes de su partido no debían pronunciarse en favor o en contra de ninguno de los precandidatos. De esta manera, la innovación de esta sucesión también consistió en atribuir cualidades democráticas a la adivinanza. El presidente y los jefes principales del sistema político se habían manifestado a favor de que la gente analizara a los posibles. ¿Qué resultados tendrían esos análisis? ¿Cómo se iban a tomar en cuenta? y preguntas por el estilo, no caben dentro de esta ficción.

Una innovación más fue que los mencionados por Rovirosa como precandidatos aceptaron que lo eran, aunque unánimemente reconocieron que esperarían los procedimientos de su partido (el PRI) sin realizar lo que en muchos otros sistemas políticos hubiera podido entenderse como una pública y necesaria campaña, a fin de que presentaran esos precandidatos sus puntos de vista y programas a los miembros de su partido y éstos seleccionaran a alguno de ellos como candidato presidencial.

En México no ocurrió eso. Ni los sancionados precandidatos renunciaron a sus puestos, ni hicieron abierta y franca precampaña.

Por el contrario, se mantuvo e intensificó la criptocampaña, hasta el 22 de septiembre de 1975 en que, de golpe sorpresivo, sin indicios mínimos que lo justificaran, sin dar cuenta pública del resultado de la anunciada auscultación, el máximo dirigente *charro*, Fidel Velázquez, fue a ver al secretario de Hacienda y le ofreció el respaldo del sector obrero del PRI para que fuera candidato a la presidencia de la República.

En el mes de julio, el escritor Vicente Leñero publicó un artículo que recuerda la obra de Lampedusa, *El Gatopardo*. El artículo con título señero fue: "Sucesión Presidencial: Un cambio para que nada Cambie" (*Excelsior*, 9-VIII-75). Entre abril y septiembre de 1975, etapa final de la criptocampaña, se producen los siguientes hechos dignos de mención.

—Se formó un Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que reúne a los principales organismos de la burguesía industrial, bancaria, financiera y comercial. Este consejo emitió una declaración de principios con 17 temas, el 8 de mayo de 1975, en la que se consideraba que la inter-

vención del Estado debería reducirse, que la lucha de clases era "anti-social" y que el Estado debía garantizar la libre empresa entre sus funciones principales. El CCE dio a conocer su declaración al presidente Echeverría, tres días antes de darla a la prensa. El presidente calificó la declaración de interesante "aportación" y dijo que el gobierno estaba para escuchar a todos los sectores. El 27 de mayo los presidentes y vice-presidentes de Cámaras de Comercio de la República declararon su más amplio apoyo al CCE y en torno a la sucesión: "Los empresarios no buscan el poder, pero sí desean que el próximo presidente de la República sea de ideología nacionalista y no propia de países como Chile, Cuba, Rusia o China." (*Excélsior*, 28-V-75). La formación del CCE fue interpretada por Carlos Pereyra, dentro de la sucesión presidencial, de la siguiente manera: "La complementariedad básica entre el aparato gobernante y la fracción hegemónica del capital no cancela la posibilidad de fricciones y discrepancias de diversa índole entre ambos... No puede extrañar por consiguiente, el esfuerzo observado en los últimos años entre los sectores económicamente más poderosos, encaminado a obtener un espacio mayor en los centros de dirección política a nivel nacional..." (a los empresarios del CCE) "... les es necesario, además surgir como portavoces de la burguesía en su conjunto y, en la medida de lo posible, aglutinar en torno suyo a las clases medias, toda vez que es evidente su imposibilidad de atraer la simpatía de los trabajadores de la ciudad y del campo". (*Excélsior*, 19-VI-75).

—Durante todo el año el presidente Echeverría realizó diversos viajes, pronunciando discursos de tono tercermundista. El 8 de julio partió a un viaje de 42 días por América Latina, Asia y el Cercano Oriente y visitó trece países. Antes de su salida pidió a los precandidatos presidenciales que estuvieran tranquilos. La salida del presidente en lo más fuerte de la criptocampaña revela la solidez y fuerza con que está establecido el aparato estatal mexicano. El presidente en esa ocasión dijo a los periodistas: "Hay natural interés en la próxima campaña presidencial, pero hay la madurez y sensatez políticas del pueblo mexicano". (*Excélsior*, 9-VII-75). Durante la ausencia del presidente todos los precandidatos se esforzaron en sus declaraciones por demostrar que estaban tranquilos, trabajando al ritmo del presidente Echeverría, en lo que cada uno tenía encomendado.

—El 26 de agosto, el presidente de la CONCACIN, Jorge Sánchez Mejorada, se refirió a la sucesión presidencial. Dijo que a los empresarios no les interesaba que el presidente fuera de izquierda o aun de extrema izquierda, siempre y cuando siguiera las reglas del juego de la economía mixta mexicana en la cual se garantiza la libre empresa y los derechos de los inversionistas. Sánchez Mejorada sugirió que las condiciones del país eran tales que no podían haber sorpresas excesivas.

—La sorpresa excesiva fue que el jefe del PRI, Jesús Reyes Heróles, no figurara en el destapamiento. Dicho personaje, desde abril de 1975

se encontraba promoviendo la elaboración del llamado Plan Básico de Gobierno 1976-1982. A partir de junio de 1975 los trabajos para la formulación de dicho Plan se intensificaron notablemente. Se invitó a participar en las reuniones a técnicos y dirigentes de todo el país, algunos de ellos muy reconocidos en sus especialidades. El 12 de junio de 1975 se realiza en la ciudad de México la pomposa Sesión Plenaria Constitutiva de la Conferencia Nacional del Plan Básico de Gobierno 1976-1982. La memoria del Plan señala: "Asisten, en su calidad de miembros distinguidos del Partido Revolucionario Institucional, los gobernadores de todas las entidades federativas; los representantes de las H.H. Cámaras de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los de las Comisiones Nacionales Consultivas, los presidentes y representantes de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, los directivos del IEPES (Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI) y miembros de los 32 Centros de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, los representantes de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, los representantes de cada uno de los sectores del Partido, los representantes de las Asociaciones de Profesionales, Técnicos y numeroso grupo de expertos y especialistas en las más diversas materias." (*Plan Básico de Gobierno*, VIII Asamblea Nacional Extraordinaria, pág. 209). Para tener una idea de la importancia que se atribuyó al Plan Básico y del costo que tuvieron sus actos realizados con manifiesto dispendio, considérese que se instalaron 14 Comisiones Nacionales sobre otros tantos temas y 8 Comisiones Sectoriales. Se celebraron entre el 30 de junio hasta el 5 de septiembre de 1975, 5 tumultosas Reuniones Nacionales, 8 Reuniones Regionales, además de la reunión del Consejo Nacional del PRI, el que convocó a la VIII Asamblea Nacional Ordinaria para aprobar el Plan.

El trabajo desarrollado para lograr el Plan Básico fue muy intenso. No es posible calcular los gastos de transportes, alojamiento, comidas, locales, propaganda, secretarías, publicidad, etcétera, que la elaboración de tal Plan tuvo. Muchos millones sin duda. El jefe del partido había anunciado que primero estaría el programa y después aparecería el hombre. El jefe del PRI fue sorprendido y, en la reunión de instalación del Consejo Nacional del PRI el día 22 de septiembre que se desarrolló frente a las cámaras de televisión y la prensa en pleno, un ayudante se acercó a Reyes Heróles y discretamente le informó que Fidel Velázquez, había *destapado* a López Portillo. Se comentó que Reyes Heróles había montado en cólera. Algún caricaturista lo pintó colgado en una brocha con la que pintaba Plan Básico... sin que pudiera terminar siquiera la sílaba. El Plan fue concluido e impreso en distintas formas y tamaños. A poco tiempo del destapamiento, ya nadie se acordaba del Plan Básico. Reyes Heróles dejó el PRI y la jefatura del partido fue entregada al Secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. La criptocampaña había terminado.

Visto en su conjunto, el panorama de la primera parte de la sucesión resulta grotesco, lleno de efectos teatrales y de ocultamientos hechos a la luz pública. Las fracciones de empresarios organizados operan de diversa manera. La que agrupa a los empresarios reunidos en el CCE, con una ideología derechista, trata de contrapesar a la poderosa fracción de la burguesía burocrática, dominada durante el sexenio echeverrista por un afán reformista que aun cuando relativamente impotente para realizar cambios, nunca abandona el lenguaje, los regaños y amenazas populistas contra los empresarios, privados. Estos últimos, como lo prueban las citadas declaraciones del presidente de la CONCAMIN, saben que por más izquierdista que pueda ser el tono del presidente, el sistema garantiza límites que, en último análisis, permiten a los grandes empresarios moverse satisfactoriamente en materia de relaciones laborales, garantías para la inversión, impuestos bajos y considerables ganancias. Los empresarios medianos y pequeños, en cambio tuvieron problemas serios y un buen número de ellos quebró. Esto opera a favor de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Es cierto, por otro lado, que los empresarios privados no aceptan con humildad los regaños populistas. Algunos grupos empresariales más dignos y conservadores que el grueso de ellos, contestan los regaños populistas —sobre todo durante el último año de gobierno de Echeverría— con agresiones verbales y escritas al régimen. Los empresarios medianos y pequeños se alegraban con las críticas de los conservadores. Este último papel lo jugaron sistemáticamente empresarios de Monterrey. La fuerza de presidente para nombrar a su sucesor no es discutida por nadie.

### *Las elecciones*

Después de más de un año de criptocampaña, se produce el *destapamiento*. A partir de que se conoce el nombre del futuro presidente de la República, empiezan a desfilar por su oficina cientos de miles de personas a felicitarlo y a ponerse “a sus órdenes”. Durante un tiempo se prepara la campaña electoral. Esta campaña, tiene dos funciones básicas: 1) dar a conocer al candidato oficial que ha sido designado, y 2) que el candidato conozca en detalle e *in situ* un buen número de problemas locales y nacionales. Ambas funciones son importantes por sí solas, pero más allá de ellas y como resultado final, el llamado proceso electoral busca legitimar el sistema político de dominación implantado en México hace más de cincuenta años.

En elecciones presidenciales anteriores se realizó un ceremonial de juego de partidos, dos o más de los cuales lanzaban candidatos que se oponían entre sí y tenían reconocimiento oficial como candidatos presiden-

ciales. Es cierto, por otro lado, que sólo en un par de ocasiones hubo un núcleo importante de la ciudadanía que dudó del triunfo del candidato oficial. Estas dos ocasiones fueron cuando se funda el partido oficial y se opone a su candidato el gran educador José Vasconcelos (1929), y años más tarde, con la candidatura del general Juan Andrew Almazán (1940). Desde luego, nunca ha triunfado la oposición y el electorado ha sido domesticado, con fraudes y violencia. Los electores han entendido que hagan lo que hagan, voten por quien voten, el único partido que puede triunfar en la lucha presidencial y en las de gobernadores es el oficial.

De hecho, la oposición llegó a su punto más alto en materia de votación reconocida, durante el año de 1970, en el que alcanzó casi dos millones de votos (1.945,070), contra casi de doce millones de votos del PRI (11.708,065). Parece que la votación proporcionalmente más alta alcanzada por la oposición fue durante la campaña almazanista (1940), aunque entonces sólo se reconoció al opositor el 5.72 por ciento de la votación total. Es decir, el sistema político ha operado reconociendo menos, precisamente cuando la oposición se manifiesta más peligrosa y obtiene más apoyo y sufragios. La docencia política que realiza con la ciudadanía el sistema de imposición, ha sido eficaz durante las últimas cinco décadas, hasta el punto tal de decaimiento ciudadano en que no hubo candidato registrado de oposición en las elecciones de 1976.

Lo que todo el mundo sabe o supone, fue declarado abiertamente por un importante político que ocupó la presidencia del PRI durante la campaña del presidente Díaz Ordaz y después la Secretaría del Patrimonio Nacional y el gobierno del D.F., Alfonso Corona del Rosal. Las declaraciones de este político se produjeron diez días antes del destapamiento. Dijo: "En México ha sido y es necesario para mantener la unidad y la trayectoria revolucionaria del país, que el presidente de la República concentre todo el poder político... y con su autoridad moral y política escoge, recomienda y apoya a su sucesor en el proceso electoral interno de nuestro partido..." (*Excelsior*, 12-IX-75) La concentración de poder personal llegó a un punto muy alto durante las elecciones.

No fue posible elegir pues sólo había un candidato, el oficial. La crisis del Partido Acción Nacional, único que había lanzado candidatos presidenciales con reconocimiento en las últimas tres elecciones (1958, 1964 y 1970), lo condujo a no presentar candidato esta última ocasión y reveló sintomáticamente a pesar de un importante sector de partido, el estado de agotamiento político al que había llegado el país.

A la campaña del candidato oficial, que es una caravana llena de colorido, de música y grandes comilonas, entretejidas por actos artísticos y desfiles de peticionarios, se invita a dirigentes de los más diversos y encontrados grupos sociales: empresarios grandes, medianos y pequeños, dirigentes obreros, campesinos, de empleados, intelectuales, artistas, profesionistas destacados, expresidentes de la república, exgobernadores,

caciques regionales y toda clase de políticos oficialistas que tengan alguna relevancia en la región. Desde luego, el candidato oficial, durante su recorrido por los Estados de la República va acompañado por los gobernadores en funciones, por los diputados federales y locales y por los senadores en ejercicio. Nadie duda de que en este gigantesco ceremonial, que tiene por escenario el país entero lleno de tribunas y templetas, se está transmitiendo el poder. Todos los políticos oficiales, aun del rango más bajo, buscan que el candidato sancione su liderazgo y, a la vez, le dan el espaldarazo con el pequeño poder de que ellos disponen. Hay una comunión de pequeños poderes, aparentemente atomizados, con el gran poder que despunta en la cúspide. Hay una nueva unidad del poder, en la medida que quien lo encabeza va a proponer un nuevo estilo para conducirlo, dentro de las limitaciones que plantea la correlación de fuerzas en el interior del país y en el exterior. Esta es quizá la parte más importante de la campaña. Las multitudes congregadas ("acarreadas", se dice) para escuchar los discursos del candidato y hacer largas y a veces plañideras o bien amenazantes peticiones, son parte del paisaje y del escenario electoral. Muchos obreros urbanos van a los actos de campaña entre otras cosas, porque les ofrecen días de descanso a cambio. Los campesinos acuden a los mítines, porque les hacen saber con todo cuidado del poder que el candidato tendrá para la dotación de tierras, el otorgamiento de créditos y la promoción de obras que beneficiarían a su zona; también se les amedrenta. Los empleados públicos asisten a los actos de campaña para proteger sus puestos. Los profesionistas agrupados en el PRI, para que el candidato se fije en ellos en su capacidad organizativa, en su talento para tratar a grupos de campesinos o marginados que vienen a plantear problemas dramáticos al candidato, en sus posibilidades retóricas. Los empresarios van a las campañas para asegurar contratos, exenciones de impuestos, buena voluntad de los dirigentes *charros*, renovación de concesiones públicas, avales gubernamentales para créditos internacionales, inversiones públicas que beneficien o intensifiquen el beneficio de sus privadas propiedades. También asisten a las campañas presidenciales del PRI, dirigentes de dos partidos que desde hace cuatro sexenios apoyan al candidato oficial; el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Resulta bastante aventurado calcular el gasto de una campaña presidencial. Las erogaciones provienen de todos los rumbos. El gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), gasta sumas muy considerables, además de los empleados que "comisiona" para que desarrollen determinadas funciones. Usualmente, los gobiernos federal, estatal y municipal se reparten los gastos de alojamiento, comida y bebida de las numerosísimas comitivas de invitados y sus ayudantes. Las impresiones de folletos, carteles, letreros luminosos, pintura de bardas, anuncios de radio, televisión y cine y otros muchos gastos son también cubiertos con recursos gubernamentales. Los transportes de todo tipo se

obtienen de dependencias gubernamentales y de los concesionarios. Decenas de aviones de empresas públicas (Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, etcétera), helicópteros y otros medios de locomoción son puestos a disposición de los organizadores de la campaña. Comunicaciones telefónicas, telegráficas y radiofónicas en proporciones descomunales están gratuitamente al servicio del candidato. Servicios de seguridad con despliegue de fuerza y multitud de elementos de "inteligencia", pululan durante toda la campaña.

La campaña de López Portillo se inició en el Estado de Querétaro el 9 de octubre de 1975 y finalizó en La Paz, Baja California, el 6 de junio de 1976. Para tener una idea del esfuerzo y los recursos invertidos en ella, hay que tener en cuenta que el candidato presidencial tuvo 3,960 horas de actividad; 80,000 kilómetros recorridos; 924 poblaciones visitadas; 453 mitines; 1,550 discursos; 148 reuniones de carácter técnico; 132,410 peticiones recibidas; y 43 reuniones nacionales.

El trabajo y gastos que toma la legitimación del sistema político son cuantiosos. El ritual tiene cada vez más exigencias. Las masas participan muy pasivamente en el ritual. El candidato priista no tiene que ganarse los votos de los ciudadanos; lo saben él y ellos. Menos en esta ocasión en que el candidato oficial, no tuvo contrincante registrado. La concepción que se tiene de un candidato presidencial sostenido por el partido oficial, no es la de un aspirante al gobierno que compite con otros, sino alguien que ya obtuvo enorme poder y que va a mostrarlo en la campaña a los diversos sectores que componen la sociedad mexicana. Muchos de sus actos de campaña, son verdaderos actos de gobierno, en la medida que las sugerencias del candidato a gobernador, y aun a secretario de Estado, son acatadas como órdenes. El candidato de oposición a la presidencia, es considerado por muchos como un iluso, si no es que como un actor de farsa ("palero"). El opositor presidencial a veces es considerado también como un poco mártir o un tanto loco. Cansados de sufrir estas consideraciones comunes y de colaborar a la legitimación del sistema con una gratificación muy baja, los panistas finalmente decidieron no presentar candidato en esta ocasión.

La oposición en su conjunto en la que predomina ampliamente el PAN, hasta el año de 1974, según publicó el Instituto Mexicano de Estudios Políticos (IMEP), sólo contaba "en su haber con 26 presidencias municipales, 4 diputaciones locales por mayoría, 5 diputados federales por mayoría, 2 diputados locales de partido y 37 diputados federales de partido. Así, tras 45 años de vida institucional de los partidos políticos, el PRI mantiene el 98.89 por ciento de las presidencias municipales, el 96.32 por ciento de las diputaciones federales y el 100 por ciento de las senadurías y gubernaturas" (*Análisis Político*, Vol. 4, 1º de diciembre de 1975).

Ante esta debilidad extrema, que en parte fomentó la división interna, el PAN entró en una crisis muy fuerte. La división interna de este par-

tido tuvo dos facetas. Ideológica una y táctica la otra. Se formaron dos grupos antagónicos y al parecer irreconciliables. Uno que sostiene tesis más avanzadas —*el solidarismo*— y que demuestra una mayor sensibilidad a la desigualdad social y económica; este grupo, además venía luchando desde hace años por la abstención como única reacción efectiva ante el continuo fraude electoral y la permanente ficción sostenida por el gobierno. El otro grupo sostenía tesis más conservadoras aunque más populacheras y auspiciaba la participación en la campaña presidencial. Desde el mes de octubre de 1975, la crisis en el PAN empezó a manifestarse y avanzó en forma irreversible. El PAN no presentó candidato finalmente. El 17 de enero de 1976, el senador priista Rivera Pérez Campos dijo: "... los tres partidos de oposición están a cual más débil, incluso se muestran más débiles que antes... Los partidos de oposición están en una debilidad de muerte; casi se puede decir que están agonizando, lo cual, por cierto, es muy lamentable" (*El Día*, 17-I-76). Como puede verse un vocero de los asesinos lamenta, circunspecto y hasta afligido, la muerte de los partidos.

El PPS, partido que se autodefine como marxista-leninista, también entró en profunda crisis durante el período de las elecciones. Apoyó la candidatura de López Portillo, después de tener un serio conflicto con el PRI en las elecciones para gobernador del Estado de Nayarit. El candidato del PPS a la gubernatura de Nayarit reclamó el triunfo y denunció múltiples fraudes electorales. Los dirigentes nacionales negociaron a puerta cerrada con los dirigentes del PRI. El resultado de la negociación fue que el PPS, meses más tarde, obtuvo un senador (postulado conjuntamente por ese partido y por el PRI en coalición). En tiempos recientes el PPS tuvo una escisión de los descontentos con esa transacción. El PPS es un pequeño partido integrado fundamentalmente por profesionistas y empleados de clase media. Desde hace cuatro sucesiones apoya al candidato del PRI.

El 14 de diciembre de 1975 el PCM anunció que lanzaría candidato presidencial independiente. El PCM no tiene registro oficial de partido y en consecuencia no puede, según la ley electoral, lanzar candidato con registro. Los votos por tal partido quedarían automáticamente anulados, además de que nunca se sabría exactamente cuántos había obtenido. El candidato comunista Valentín Campa declaró a la revista *Punto Crítico*: "... decidimos participar en la campaña con los siguientes objetivos: uno de conjunto, tratar de impulsar las fuerzas independientes, lograr un cierto acomodamiento de fuerzas para continuar con próximas batallas de mayor importancia". (2ª quincena febrero de 1976). El 10 de abril de ese año el PCM trata de registrar a su candidato invocando un derecho constitucional que establece que todos los ciudadanos mexicanos en uso de sus derechos pueden elegir y ser electos. Gobernación no accedió a registrar al candidato comunista en las boletas electorales en vista de que el artículo 107 de la Ley Electoral Federal establece: "sólo

los partidos políticos nacionales registrados pueden registrar candidatos". La Ley Electoral limita notablemente los derechos políticos.

El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) celebró su Asamblea Nacional Extraordinaria al finalizar el mes de febrero de 1976 y decidió no lanzar candidato presidencial ni participar en otras elecciones.

Los resultados de las elecciones del 4 de julio de 1976 fueron los siguientes: José López Portillo 16.767,210; votos por candidatos no registrados, entre ellos el del PCM, 222,079; votos anulados, 769,163. Fátima Fernández, del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, calculó que existían casi 30 millones de ciudadanos (29.788,308), de los cuales se empadronaron 25.913,215, es decir el 86.99 por ciento, y de éstos, más de 9 millones, el 36.74 de los empadronados no votaron y más de 13 millones de ciudadanos, contando también a los que teniendo obligación de hacerlo, no se empadronaron y en consecuencia no votaron 44.97 por ciento (*Cfr. Revista Estudios Políticos* N° 7, UNAM). Esta es la manifestación de la ciudadanía no controlada por el PRI o por alguno de los partidos registrados. El control político sobre la mayor parte de la ciudadanía es todavía bastante eficaz, pero se ha venido reduciendo y no parece que pueda durar muchos más procesos electorales en las actuales condiciones.

El PMT y el PCM, libran una batalla desde hace año y medio y seguirán luchando según anuncian, por la modificación de la Ley Electoral Federal, a fin de obtener condiciones aceptables para su registro y participación electoral en próximos comicios.

Independientemente de la lucha política formal, las organizaciones sindicales independientes continuaron sus luchas en el seno de la sociedad civil. En los años de 1975 y 1976 los conflictos laborales no fueron tan intensos como en 1974. Sin embargo, se destacan algunos grupos sindicales que parecen consolidarse en posiciones independientes del Estado. Entre ellos pueden mencionarse a la Tendencia Democrática del SUTERM (electricistas), la Unidad Obrera Independiente (UOI), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la intersindical y el Frente Sindical Independiente. Promovido en gran medida por la Tendencia Democrática de los electricistas, se crea en 1976 el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) como un organismo permanente coordinador estratégico del movimiento de trabajadores independientes.

Las masas de trabajadores aun no pueden expresarse políticamente en términos significativos. La mayoría está controlada y mediatizada por organizaciones progubernamentales. Este control garantiza la continuidad del sistema capitalista de dominación. La coyuntura de la sucesión presidencial que referimos permite ver, sin embargo:

1. Un crecimiento notable de la insurgencia obrera independiente que busca sus propios medios de expresión sindicales y políticos. Los primeros los ha ido forjando, a pesar de la represión; los segundos

se apuntan ya en forma embrionaria pero todavía sin la seguridad de haberse afirmado en la vida política. Se calcula que el movimiento de trabajadores independientes contó con 200 ó 300 mil durante el sexenio de Echeverría. Los ciudadanos agrupados en torno del PMT y del PCM —los dos partidos más importantes de izquierda— suman apenas algunas decenas de miles, según cálculos optimistas. La lucha de clases cobró una nueva dinámica, y a pesar de la represión que se espera, puede continuar avanzando.

2. Los empresarios han optado, y parece que seguirán optando en el futuro inmediato, por la vía de la presión sobre el gobierno. El PRI les garantiza la continuidad de la explotación y la acumulación. El apoyo que se dice daban al PAN, se ha reducido considerablemente, o bien se ha cancelado. Eso explica en parte la "crisis" del PAN.
3. Los partidos políticos registrados distintos del PRI, tienen una membresía escasa, predominantemente de extracción media. El PAN redujo su votación del 14.70 por ciento en 1973, al 8.50 en 1976 (me refiero a la votación total por los partidos). El PPS tuvo una división interna y difícilmente sobrevivirá.
4. Los partidos independientes no lograron registro, pero por lo menos el PMT y el PCM demostraron una vitalidad y una capacidad de trabajo político mayor que los partidos registrados. El PMT y el PCM están potenciando la unidad para ciertas acciones concretas para lograr la reforma de la ley electoral, la escala móvil de salarios, el combate político contra los *charros* y otras, que puede reunir a otras fuerzas sindicales y políticas y presentar una alternativa en las elecciones de 1979. Si esto sucede, es posible pensar que la izquierda pase a ocupar el primer lugar de la oposición mexicana, sustituyendo al desgastado PAN.
5. Si el poder presidencial se reduce durante el sexenio de López Portillo, y con tal reducción, pasa otro tanto con la autonomía con que toma sus decisiones, es previsible que la operación del *tapa-dismo* pierda precisión, o sea impugnada por alguno de los no favorecidos y se produzca una crisis fuerte del sistema político. Dos cosas parecen factibles para que el poder presidencial se reduzca en la medida que la lucha de clases avanza y empieza a manifestarse como política: 1) que la fuerza de empresarios nacionales, sus socios extranjeros y otras fuerzas internacionales (FMI, por ejemplo), aumenten su grado de presión; 2) que los movimientos populares independientes sigan avanzando fuera del control gubernamental. Hasta ahora el presidente ha podido tomar la decisión personal sobre la sucesión presidencial, porque: 1) llega a ese periodo con gran fuerza política indisputada; 2) hay relativa bonanza económica y el gobierno cuenta con un sector cada vez más fuerte de

empresas y organismos estatales. Durante el último sexenio echeverrista las actividades económicas del Estado crecieron gracias al tremendo endeudamiento que ahora tendrá que frenarse. Además, aunque la crisis económica surgió patentemente durante el último gobierno, se hizo pública casi un año después del *destapamiento*. Por otro lado, la crisis económica no fue lo suficientemente prolongada como para producir graves conflictos en la sociedad civil que rebasaran la capacidad de presión y negociación del gobierno. Los subsidios al campo y los aumentos de salarios frenaron en forma efímera, al filo de la sucesión, la aparición de la crisis económica en la que ahora estamos. En el sexenio 1976-1982 es previsible que se reduzca la intervención del Estado en la economía y que los movimientos de la sociedad civil se multipliquen y se hagan cada día más difíciles de controlar. Eso puede traducirse en que para la próxima sucesión presidencial se produzca un combate político más abierto.